

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL Medellín, siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MARÍA GLEIDY GÓMEZ CASTAÑO en contra de COLPENSIONES (Rad. 05001-31-05-016-2017-00934-01).

ANTECEDENTES:

Por el fallecimiento de quien fuera su compañero permanente, la demandante pretende a través de este mecanismo ordinario, al cobijo de la condición más beneficiosa, el pago de la pensión de sobrevivientes desde el 8 de enero de 2013, con intereses de mora y las costas (fl. 5).

Al efecto narró que su compañero permanente, José Aicardo Mejía Salazar, murió el 6 de enero de 2013, habiendo convivido ininterrumpidamente con él, desde el 19 de junio de 1992. El referido, fue afiliado del RPM, y cotizó 637 semanas, de las cuales, más de 430, se pagaron en vigencia del Decreto 758 de 1990. El 9 de octubre de 2015, reclamó la prestación a la convocada, pero esta le fue negada, en la Resolución GNR 84369 del 17 de marzo de 2016, en tanto dentro de los 3 años anteriores a la data de la defunción, el afiliado no

tenía reportado ningún aporte. Sin embargo, se le otorgó la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, en \$9.994.102 (fls 3 y 4).

Colpensiones aceptó como ciertos los hechos relativos a las semanas cotizadas por el causante, y el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a la promotora. Se opuso a las pretensiones, por no suplirse los requisitos de la condición más beneficiosa, y ese sentido propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción e imposibilidad de condena en costas (fls 27-31).

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín (Ant.), en sentencia del 31 de octubre de 2019, absolvió de las pretensiones a la pasiva declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación, porque la condición más beneficiosa no ampara el caso, en vista que el fallecimiento del causante ocurrió después del 29 de enero de 2006. Costas en primera instancia a cargo de la demandante, con agencias en derecho de \$600.000.

Como tal determinación no fue cuestionada a través del recurso vertical, pero resulta ser desfavorable a los intereses de la demandante, conoce la Sala del asunto en el grado jurisdiccional de Consulta, como es el mandato del artículo 69 del CPTSS.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Son presupuestos fácticos no discutidos, los siguientes: i) El 6 de enero de 2013, falleció José Aicardo Mejía Salazar (fl 10); ii) En vida, fue afiliado del ISS hoy Colpensiones, cotizando al sistema de seguridad social en pensiones,

desde el 15 de diciembre de 1981 hasta el 17 de abril de 2009, 637 semanas, de las cuales 498,28 se aportaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 (fls 13 y 14); iii) María Gleidy Gómez Castaño, fue su compañera permanente desde 1992 y hasta su deceso, por lo que es beneficiaria de la posible pensión de sobrevivientes, en tanto a ella se le reconoció el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes (fl 15), en este punto, pueden consultarse las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, SL3461 de 2018, SL2152 de 2019, SL5037 de 2020 y SL3933 de 2021, en las que se fijó como regla, que se debe tener por acreditada y no discutida la condición de beneficiario a quien le fue reconocida la indemnización sustitutiva; y iv) El 9 de octubre de 2015, la demandante reclamó a Colpensiones la pensión ahora pretendida (fl 12 y 13)

Teniendo en cuenta la claridad de los anteriores elementos, corresponde a este cuerpo colegiado, definir si José Aicardo Mejía Salazar, dejó causada la pensión de sobrevivientes que hoy reclama su compañera permanente.

Pues bien, como se sabe, en estos casos, impera la teoría del hecho causante, según la cual, para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes, deben los beneficiarios sujetarse a las normas vigentes al momento del fallecimiento del pensionado o afiliado.

En el sub lite, ello ocurrió el 6 de enero de 2013, por lo tanto y en principio, los requisitos que deben suplirse, son los contenidos en la Ley 797 de 2003, en cuyo artículo 12 se prevé como exigencia que el afiliado hubiere cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a su deceso, las que de una vez, ha de decirse, no se suplen en el *sub analice*; según el resumen de tiempos aportados del folio 14, el causante dejó de cotizar el 17 de abril de 2009, luego, entre el 6 de enero de 2010 y los mismos día y mes de 2013, no tiene ninguna semana cotizada.

En ese horizonte, es claro que en acatamiento de la Ley 797 de 2003, la demandante no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Resta por

verificar, si en virtud del principio de la condición más beneficiosa, se lograría lo pretendido. No obstante, se recuerda que ese principio no supone una aplicación ultractiva de cualquier normatividad, pues la razón de ser de esta creación jurisprudencial, fue precisamente establecer una especie de régimen de transición para salvaguardar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas en materia de pensiones de sobrevivientes e invalidez, y como tal, esta posibilidad no puede ser indefinida en el tiempo, por ello, el órgano de cierre de esta jurisdicción, desde la sentencia SL45650 de 2017, adoctrinó que para aplicar a un caso ocurrido en vigencia de Ley 797, las previsiones de la norma anterior, esto es, la Ley 100 en su texto original, la muerte del afiliado debía ocurrir dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de la nueva legislación, quiere ello decir, que como la Ley 797 inició su vigencia el 29 de enero de 2003, la muerte debe ocurrir hasta el 29 de enero de 2006. Interpretación que encontró razonable la Corte Constitucional, cuando en la sentencia SU 005 de 2018, señaló:

“299. (iv) La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el principio de la condición más beneficiosa de una forma que lejos de resultar constitucionalmente irrazonable es acorde con el Acto Legislativo 01 de 2005. Para dicha Corte, este principio no da lugar a la aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 u otros regímenes anteriores. Por tanto, el hecho de que el cotizante hubiese realizado aportes pensionales, por lo menos por el número mínimo de semanas previsto en dicha normativa para acceder a la pensión de sobrevivientes, sumado a la muerte del cotizante tras la expedición de la Ley 797 de 2003, no genera el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes para el beneficiario. Esta regla, en todo caso, sí ha considerado la aplicación ultractiva de las disposiciones de la Ley 100 de 1993, para efectos del cómputo de las semanas mínimas de cotización, únicamente en aquellos supuestos en los que la muerte del afiliado hubiese acaecido dentro de los 3 años posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003”.

En el *sub examine*, no hay lugar a aplicar la condición más beneficiosa para exigir 26 semanas cotizadas en cualquier momento y otorgar la pensión deprecada, por la simple razón que la muerte del causante ocurrió en enero de 2013, esto es, por fuera del límite temporal que ha impuesto la jurisprudencia.

Ahora, tampoco procede el derecho en aplicación de la condición más beneficiosa, recurriendo a las previsiones que en materia de pensión de sobrevivientes regulaba el Decreto 758 de 1990, pues no se acreditaron los presupuestos jurisprudenciales de la ya citada SU 005, en la que se expresó, que ello es posible si se supera el denominado *test de procedencia*, que permite tener al solicitante de la subvención como *una persona vulnerable*, lo que justifica el tránsito legislativo sin límite. En este evento, si bien se infiere de la Resolución GNR84369 de 2016 (fl 13), que Gómez Castaño, diligentemente reclamó la pensión, no se aportó ningún medio de convicción del que pueda extraerse: 1) que aquella pertenece a algún grupo de especial protección constitucional; solo por su edad, de 57 años (fl 13), no ha ingresado a la población que por longevidad, es resguardada especialmente; 2) que la falta del reconocimiento pensional afecte su mínimo vital; 3) que en vida del causante, la demandante dependía económicamente de aquél; y 4) que el causante se encontró en circunstancias que le imposibilitaron las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

Así las cosas y sin lugar a mayores elucubraciones, no hay otro camino más que confirmar la decisión de primera instancia por encontrarse acorde a la legislación y a las posturas jurisprudenciales vigentes, avalando el no otorgamiento de la pensión.

Sin costas en esta instancia, por haberse surtido en favor de la demandante el grado jurisdiccional de Consulta

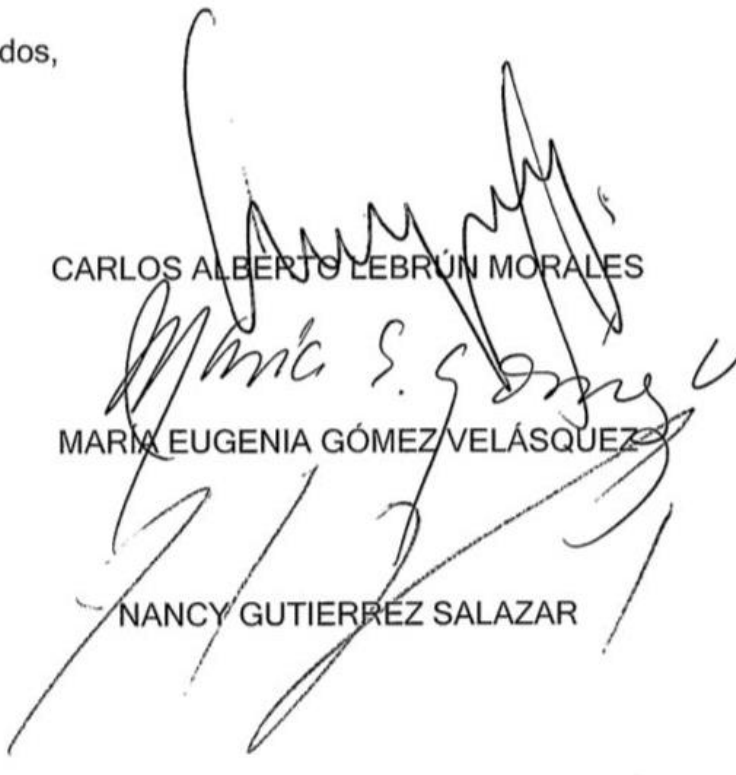
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA**, la sentencia consultada de fecha y procedencia conocidas.

Sin costas.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

Maria E. Gómez Velásquez

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR